

CRONICA DEL MES

MAYO - JUNIO

Ernesto Cruz Alfaro

En medio de una incrementada campaña de sabotaje del FMLN contra los gobiernos municipales, el 1 de mayo asumieron la vara edilicia los nuevos alcaldes, 153 de ellos demócrata cristianos, y fueron juramentados los 120 diputados propietarios y suplentes electos el 31 de marzo, abriendo paso a una nueva etapa del proceso de institucionalización del poder formal y de su recomposición a nivel del órgano legislativo y de los poderes municipales locales. Al mismo tiempo, fue elegida la nueva directiva legislativa, 3 de cuyos 9 cargos había ofrecido el PDC al PCN, AD y PAISA, manifestando que "lo que estamos tratando es que haya participación pluralista, pues nosotros muy bien podríamos controlar la directiva, como lo hacía el PCN en épocas pasadas." Inicialmente, la única respuesta afirmativa fue la del coronel Escobar García (PAISA), quien, sin embargo, condicionó su aceptación a la participación de los otros partidos. Dado que tanto el PCN como AD insistieron en rechazar el ofrecimiento, el Lic. Atilio Viéitez, jefe de la fracción democristiana, mocionó para que sólo se eligiera a 6 directivos, a efecto de dejar abiertas las negociaciones en caso de que AD o el PCN reconsideraran su negativa a integrarse a la directiva. Como presidente de ésta fue elegido el Dr. Guillermo Guevara Lacayo, por 49 votos del PDC, AD, PAISA, ARENA y el de Raúl Molina Martínez (PCN), frente a 11 abstenciones del PCN. La vicepresidencia se adjudicó a Alfonso

Alvarenga, y como secretarios fueron electos el Dr. José Humberto Posada, Judith Macla de Torres, Pedro Hernández y Carlos Funes, todos también por 49 votos, con excepción de Torres, a quien ARENA negó sus votos por "el fraude que propició en La Unión el 31 de marzo." Aunque paradójico, el apoyo de ARENA a la elección de los directivos democristianos fue interpretado como una maniobra para desvincularse de la dirigencia legislativa para que "después no se nos vaya a culpar de que no funcionó bien."

Afianzado su control sobre el poder Legislativo, el PDC procedió en la plenaria del 21 a saldar viejas cuentas con el Dr. José Francisco Guerrero, a quien destituyó como fiscal general en medio de airadas protestas de la oposición y de amenazas de que ello desataría una "crisis institucional." Los 33 diputados democristianos argumentaron que "el país no puede soportar un fiscal general que esconde la cabeza en la arena ante la demanda y exigencia de justicia de nuestra sociedad" y acusaron a Guerrero de defender "intereses de grupos y personas cuyas acciones han puesto en peligro a nuestra sociedad y a la nación entera," así como de no haber hecho "absolutamente nada por la investigación de numerosos delitos," tanto publicitados como desconocidos por la opinión pública; y designaron a continuación en lugar suyo al Dr. Santiago Mendoza Aguilar, sin dar al ex-fiscal la oportunidad

de defenderse ante las acusaciones pese a la solicitud hecha por él en tal sentido.

Contrariamente a la desarticulación operada por el PDC en los instrumentos políticos de la derecha, ésta recibió importantes garantías y concesiones en el terreno económico. Junto a la aseveración de que "este gobierno que presido es garante de la empresa privada, que nos merece todo respeto," formulada por el presidente Duarte en su discurso inaugural de la feria ganadera EXPLICA 85, el gobierno anunció una serie de medidas encaminadas a propiciar la reactivación económica sobre la base de la iniciativa privada como destinatario privilegiado. Como parte de ellas, el Banco Central de Reserva (BCR) anunció un crédito adicional de 1.635 millones de colones para reactivar las actividades del sector privado, 795 millones están destinados al sector industrial y 840 millones al agrícola. Los créditos se utilizarán para refinanciamientos, fondo de recuperación industrial e importación de materia prima, maquinaria y equipo. Otras medidas incluyeron un nuevo precio de garantía para el café, superior en 10 colones al precio de garantía anterior; y, para los algodóneros, el traslado al mercado paralelo del 100 por ciento de sus exportaciones, mientras que el 100 por ciento de sus compras permaneció en el mercado oficial; un crédito hipotecario por deudas anteriores a la cooperativa algodónera (COPAL) y un crédito de pre-exportación de 130 millones de colones para pagar créditos de avío correspondientes a la cosecha actual.

En contrapartida, ni la redefinición de espacios políticos ni los lineamientos de política económica ofrecieron un lugar a la lucha reivindicativa del movimiento laboral, que a partir del 1 de mayo entró en un nuevo período de efervescencia y generalización de los mecanismos de huelga, no obstante las medidas intimidatorias desplegadas en su contra por el gobierno. Con ocasión del día del trabajo, la Coordinadora de Solidaridad de los Trabajadores (CST), el Consejo Coordinador de Trabajadores Estatales y Municipales (CCTEM) y la Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños, convocaron a una manifestación la cual contó con la participación de entre 10 y 15 mil personas, convirtiéndose así en la mayor demostración laboral de los últimos años. El mismo día, el presidente Duarte dirigió a los trabajadores un mensaje en el cual los previno "contra la instrumentalización de aquéllos que pretenden desestabilizar el proceso democrático con el objeto de

destruirlo," advertencia insuficiente para contener la creciente movilización sindical, a juzgar por los diversos paros efectuados al interior de la administración pública, particularmente en el ministerio de educación, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). En el primer caso, la asociación magisterial ANDES 21 de Junio y la Asociación de Trabajadores Administrativos del Ministerio de Educación (ATRAMÉ), llamaron a un paro de labores el 6, 7 y 8, en protesta por la falta de respuesta satisfactoria del gobierno a un pliego de peticiones planteado varios meses atrás, el cual incluía como demandas fundamentales un aumento salarial de 300 colones mensuales y la incorporación de los trabajadores administrativos de educación a la ley del servicio médico-hospitalario. En el caso de ANDA, el Sindicato de Empresa de los Trabajadores de dicha entidad (SETA) decretó el 6 un paro de labores de 8 horas, en demanda de ajustes salariales, el cumplimiento del contrato colectivo y la destitución del presidente de ANDA, Ing. Ricardo Perdomo, y de 12 jefes más, acusados de corrupción. Ante el escaso impacto de la medida en las autoridades gubernamentales, el sindicato decretó el 13 un nuevo paro, esta vez con carácter indefinido. En respuesta al mismo, Perdomo adujo que la inteligencia militar había detectado que los dirigentes de SETA obedecían consignas del FMLN, y solicitó un cordón policiaco en torno a las instalaciones, impidiendo la entrada a los miembros de la comisión negociadora sindical, mientras desde dentro camarógrafos de COPREFA filmaban a los manifestantes. Al mismo tiempo, el juez tercero de lo laboral declaró ilegal el paro, en base al decreto 296 (emitido el 24 de junio de 1980, el cual declara ilegal toda huelga de empleados públicos) y el vicepresidente Castillo Claramount giró instrucciones a Perdomo para destituir a 49 "promotores de la huelga ilegal," entre ellos toda la dirigencia de SETA.

Por lo que respecta a la lucha reivindicativa desarrollada por los trabajadores del seguro social, el sindicato del ISSS (STISSS) decretó a partir del 6 un paro indefinido de labores hasta recibir respuesta satisfactoria a la plataforma reivindicativa presentada el 26 de febrero. Entre otras demandas, el STISSS solicitaba un incremento salarial de 300 colones mensuales; la destitución de 16 jefes, incluido el subdirector del hospital, quienes han realizado "labores anti-obreras;" y

la derogación del decreto 44 y del estado de sitio. El director del ISSS, Dr. Jorge Bustamante, respondió que tales demandas salariales resultaban imposibles de cumplir, ya que "ni el instituto ni el país están en condiciones económicas" para acceder a ellas; señaló que las exigencias de abolición del decreto 44 y del estado de sitio no eran negociables puesto que rebasaban la jurisdicción del Instituto; y deslegitimó el paro arguyendo que tenía "toda la apariencia de estar orquestado desde afuera y su fin es únicamente la desestabilización." Como no se llegara a un acuerdo, el consejo ejecutivo del ISSS decidió dar por interrumpidas las negociaciones con la comisión sindical, exigió como condición para reanudarlas el desalojo del hospital y reconvino a los trabajadores a reincorporarse a sus labores el 20 de mayo.

En todos los casos destacó la coherencia con que, tanto a nivel del discurso ideológico como de las medidas de hecho, el gobierno enfrentó y descalificó la validez objetiva de las plataformas reivindicativas planteadas, apelando al argumento de que su contenido económico resultaba materialmente imposible de satisfacer y de que, en conjunto, todas ellas obedecían a una concertada estrategia de desestabilización patrocinada e infiltrada por el FMLN.

Agregando pábulo a tales argumentos, el ministro de economía, González Camacho, y el presidente del BCR, Benítez Bonilla, rindieron declaraciones sobre la guerra como causa fundamental de la grave situación económica afrontada por el país e indicaron que, dado que los gastos militares se habían incrementado del 10 al 50 por ciento del presupuesto nacional, el gobierno se veía forzado a asumir una política de austeridad, en virtud de la cual le era imposible conceder aumentos salariales a los empleados públicos. Según González Camacho, "aumentar prestaciones y salarios en el sector público en un momento de guerra como el que vivimos, constituye una situación peligrosa que genera inflación." Por su parte, Benítez Bonilla llegó incluso a señalar la posibilidad de un "impuesto temporal de emergencia," equivalente a un impuesto de guerra, para hacer frente a la crisis económica agudizada por el conflicto militar.

En el marco de la efervescencia laboral, el presidente Duarte efectuó entre el 15 y el 26 de mayo una nueva gira por Estados Unidos, durante la cual ofreció diversas declaraciones públicas en Washington, South Bend (Indiana), Nueva

York y Miami, y se entrevistó con miembros del senado y la cámara de representantes, así como con altos funcionarios de la administración, entre ellos el secretario de defensa Weinberger, el secretario de Estado Shultz, el vicepresidente Bush y el presidente Reagan. Según Benítez Bonilla, el propósito fundamental del viaje habría sido el "ablandamiento" de la opinión pública norteamericana y, sobre todo, del congreso, "que es donde hemos tenido problemas para el desembolso de la ayuda económica." A efecto de ello, Duarte exhortó en Washington al pueblo y gobierno norteamericanos para que permitieran quedarse a unos 500 mil inmigrantes salvadoreños, aduciendo que ello era "parte de la ayuda que obtenemos para restablecer la economía" (según datos publicados por *Nesweek* a mediados de mayo, los salvadoreños residentes en Estados Unidos remiten anualmente más de 100 millones de dólares a sus familiares en El Salvador, equivalentes a casi la cuarta parte de la ayuda norteamericana al país para el presente año fiscal). Asimismo, obtuvo del BID la promesa de mayores facilidades para futuros préstamos y logró, tras visitar el Pentágono, la renegociación de la deuda militar, con plazos más largos e intereses más blandos. Al evaluar el resultado de tales gestiones, el mandatario puntualizó que "de ahora en adelante no tendremos problemas para la aprobación de la ayuda económica y militar."

A lo largo de la gira, Duarte se esforzó por ofrecer una evaluación de su primer año de gobierno en torno a la democratización, la participación, la pacificación y la reactivación económica como presuntos objetivos fundamentales. En el discurso quizá más elaborado de la gira, pronunciado en la sede de la OEA, el 21, declaró que estos objetivos habían orientado "cambios estructurales de largo alcance" que podían "calificarse legítimamente de revolucionarios" y que habían iniciado la transformación de "una sociedad injusta y anacrónica, de discriminación y privilegios, en una sociedad donde sea posible alcanzar la igualdad social, la participación política y el bienestar económico." En declaraciones posteriores agregó que el país estaba llegando al "momento clave" en el proceso democrático, del cual habían constituido jalones importantes los pasos dados para reformar el sistema judicial, incluyendo la reciente destitución del fiscal. En lo referente a la pacificación, reiteró el compromiso gubernamental de seguir haciendo del diálogo el "instrumento preferencial" en la solución de nuestro problema interno," pe-

ro manifestó categóricamente que "el poder no lo voy a compartir con nadie" y recalcó que la esencia del problema estribaba en que el FDR-FMLN "piden compartir el poder antes de depone las armas" e "insisten en los mecanismos del tiempo, del dónde y cómo: yo estoy más interesado en el objetivo: para mí lo importante es luchar por la paz." Por otra parte, negó nuevamente las denuncias de bombardeos sobre poblados por parte de la fuerza aérea, atribuyéndolas a la "propaganda de los extremistas, que tratan de desacreditar a la naciente democracia salvadoreña;" y aseguró que, desde que asumió el poder, ordenó "en forma terminante que no habría más bombardeos, ni en las zonas controladas por los guerrilleros." En el terreno militar, admitió que, si bien la Fuerza Armada había logrado importantes avances sobre el FMLN, no estaba aún en capacidad de derrotarlo, a pesar de los 40 helicópteros de combate provistos por Estados Unidos, 3 años de intenso adiestramiento por asesores norteamericanos y una cuadruplicación de sus fuerzas.

Por su parte, la administración norteamericana aprovechó la gira para exhibir el caso salvadoreño como muestra del presunto éxito de su política regional. El propio Reagan indicó que "aquéllos que cuestionan nuestros esfuerzos en Centroamérica deberían tomar nota de los progresos que ha hecho El Salvador" y agradeció a Duarte su "valeroso apoyo hacia mi iniciativa de paz nicaragüense y el embargo comercial." A su vez, el mandatario salvadoreño rehusó comentar explícitamente sobre la política de la administración hacia Managua, pero declaró que "nuestra revolución es mejor que la marxista de Nicaragua;" aconsejó a la Casa Blanca que apoyara a los antisandinistas que no estuvieron vinculados a Somoza; y señaló su disposición a discutir con Nicaragua "los problemas que tenemos" si el gobierno sandinista cesaba de "exportar la revolución" y apoyar al FMLN.

Según un balance preliminar, el viaje constituyó un éxito político en términos del apoyo recibido de parte de diversas instancias del poder norteamericano, así como de las garantías recibidas acerca del flujo de asistencia económica y militar para proseguir el esfuerzo de la guerra, tanto más dinámica de una guerra de desgaste donde la búsqueda de golpes estratégicos espectaculares quedaba sustituida, para la Fuerza Armada, por los esfuerzos para interrumpir los flujos logísticos de abastecimiento al FMLN y desarti-

cular su base social de apoyo; y, para éste, por los efectos acumulativos del hostigamiento permanente a las tropas gubernamentales y a la infraestructura económica del país.

Como parte de esa estrategia de desgaste, la Fuerza Armada inició el 3 de mayo nuevos operativos de contrainsurgencia en los alrededores de Cinquera, Jutiapa y Tejutepique (Cabañas) y de San Rafael oriente y San Jorge (San Miguel), cuyas municipalidades habían sido saboteadas días antes por el FMLN; al tiempo que unidades de la fuerza aérea efectuaron fuertes bombardeos sobre el volcán Chinchontepec, en apoyo de operaciones de rastreo realizadas por tropas de la quinta brigada de infantería.

A lo largo del mes, la Fuerza Armada ejecutó diversos operativos de contrainsurgencia en 11 de los 14 departamentos, involucrando en ellos al 90 por ciento de sus unidades de combate, con la finalidad de impedir la coordinación y agrupamiento del FMLN, bloquear sus rutas claves de abastecimiento y evitar la expansión de su teatro de operaciones. De modo especial, destacaron los operativos desplegados en San Vicente y Chalatenango y en la zona de Guazapa-Suchitoto, en el curso de los cuales habrían tenido lugar bombardeos de ablandamiento contra presuntas posiciones, guerrilleras y fuertes incautaciones de armamento, medicinas y víveres en el área de San Esteban Catarina (San Vicente) y del cerro El Común (Chalatenango). La Fuerza Armada también llevó a cabo intensas operaciones en la zona costera de Usulután, particularmente en la zona baja del río Lempa y en la bahía de Jiquilisco, lugar este último donde el 20 inició un fuerte operativo con participación de 3 mil efectivos, entre ellos el recién creado Batallón "Libertadores" de la Policía de Hacienda. Según denuncias rebeldes, todos los operativos estuvieron acompañados de bombardeos indiscriminados de artillería. Otros escenarios de intenso accionar de la Fuerza Armada fueron el área de Jucuarán (Usulután) y del Sauce (La Unión) y la zona de Metapán, en los límites de Santa Ana con Chalatenango.

En respuesta a los operativos, el FMLN efectuó diversos ataques de hostigamiento a las posiciones del ejército, entre los cuales destacó la emboscada tendida en las inmediaciones de La Reina (Chalatenango) a tropas de la cuarta brigada de infantería, con saldo de 5 efectivos muertos y 22 prisioneros. Al mismo tiempo, arreció el sabotaje contra la energía eléctrica, el transporte y las instalaciones municipales. Según un mensaje

transmitido por Radio Venceremos el 10, voceros guerrilleros advirtieron que no tolerarían alcaldes gubernamentales en por lo menos 50 de 86 municipalidades de oriente donde había dualidad de poderes. Hacia finales del mes, el FMLN llevaba secuestrados 14 alcaldes, un secretario municipal y un ex-alcalde; y había destruido 105 postes y 13 torres del tendido eléctrico, 10 alcaldías y 5 oficinas de ANTEL, así como 13 vehículos de transporte y 2 gasolineras. Aparentemente, los esfuerzos de la Fuerza Armada por evitar la expansión del teatro de acciones guerrilleras, tampoco obtuvieron suficiente éxito: muestra de ello fueron los enfrentamientos y acciones de sabotaje registrados en Santa Ana, La Libertad y, especialmente, en San Salvador, donde el 18, a dos cuadras del cuartel central de la Policía Nacional, comandos urbanos destruyeron un carro-patrulla e hirieron a 5 agentes. Según un balance del comandante Joaquín Villalobos difundido a principios de mayo, el sabotaje guerrillero a la economía habría ocasionado pérdidas por 100 millones de dólares desde la asunción del presidente Duarte. Para complementar este dato, CEL informó que el sabotaje a la energía eléctrica durante los 5 primeros meses del año había causado daños por 44 millones de dólares. En lo referente al desgaste propiamente militar, Villalobos señaló que las bajas causadas al ejército en los últimos 9 meses ascendían a 3,500, entre muertos y heridos. De ellas, 312 correspondían a mayo. Desde el otro ángulo de la información, provista por fuentes militares, la guerra habría arrojado en el mes un saldo de 109 muertos, 2 heridos y 13 capturados del FMLN; y 43 muertos, 43 heridos y 22 "desaparecidos" de la Fuerza Armada. Según las mismas fuentes, 22 guerrilleros habrían desertado, y se habrían entregado o "rescatado" 69 elementos de masas.

Concentradas ambas partes en evidenciar militarmente posiciones de fuerza sobre las cuales fundar sus pretensiones de negociación, pero sin que ninguno de los bandos mostrara la fuerza suficiente para obligar al otro a sentarse a dialogar según sus condiciones, el diálogo permaneció empantanado en discrepancias formales acerca de los detalles de lugar, fecha y ciertos aspectos de la mecánica a seguir para la tercera ronda de conversaciones.

El 6 de mayo, el FDR-FMLN dirigieron al presidente Duarte, por intermedio de Mons. Rivera, una nueva propuesta para una reunión al más alto nivel a realizarse el 15 de junio en la

Iglesia parroquial de Perquín (Morazán), precedida de una reunión preparatoria de la comisión especial de diálogo, los días 30 y 31 de mayo, en la sede de la nunciatura apostólica en San Salvador. Dos días más tarde, Duarte declaró a la prensa que los Frentes habían accedido finalmente a la "nueva modalidad" de diálogo propuesta por el gobierno, consistente en conversaciones privadas que se realizarían en el exterior, previas a las sesiones públicas, a realizarse en territorio nacional. La comandancia general del FMLN y el consejo ejecutivo del FDR rechazaron inmediatamente las declaraciones, y lo acusaron de estar rompiendo el proceso de diálogo con sus "actuaciones irresponsables." En conferencia de prensa ofrecida en México por la comisión política diplomática del FDR-FMLN, Mario Aguiñada declaró que desde comienzos de año habían propuesto al gobierno continuar el diálogo el 3, 10 y 30 de enero, pero que en todos los casos "Duarte respondió con el silencio." Posteriormente, transcurrido el evento electoral y atendiendo a declaraciones suyas en el sentido de estar dispuesto a proseguir las conversaciones, le propusieron celebrar la tercera ronda el 21 de abril en Perquín, pero también esta vez Duarte rechazó la propuesta, pretextando la realización de la campaña nacional de vacunación. A las declaraciones de Aguiñada, Guillermo Ungo agregó que el presidente Duarte todavía no había respondido a la propuesta del 6 de mayo y señaló que "en los hechos Duarte está tratando de obstaculizar el diálogo." A su vez el mandatario desmintió haber dicho que los Frentes hubiesen aceptado la propuesta de conversaciones privadas en el exterior y los acusó de estar "tratando de causar desestabilización al gobierno con una serie de huelgas en el sector público" y "creando terror con el secuestro de alcaldes."

No obstante, el 27 de mayo, los dirigentes Rubén Zamora, en nombre del FDR, y Mario Aguiñada, por el FMLN, dirigieron a la asamblea legislativa una carta pública en la cual expusieron una cronología de las iniciativas realizadas por los Frentes después del evento electoral para reanudar el proceso de diálogo; iniciativas todas rechazadas por el presidente Duarte sin ofrecerles alternativa alguna. Asimismo, indicaban que ya no tenía razón de ser la excusa de carecer de mayoría en la asamblea esgrimida por Duarte después de la reunión de Ayagualo para justificar la no reanudación de las conversaciones; e instaban a la asamblea a que interpusiera ante el ejecutivo sus buenos oficios para

reniciar el diálogo "con la debida diligencia y seriedad." Al parecer, los Frentes no concedieron suficiente atención, por lo menos públicamente, a la advertencia que el 7 de mayo, en su discurso en la Escuela Militar "Capitán General Gerardo Barrios," con ocasión del día del soldado, hiciera el general Vides Casanova al mandatario, al recordarle que "tiene todo el derecho constitucional para buscar la paz dentro del marco de las leyes fundamentales de la República" pero "no debemos olvidar que la fuerza en sí es la última garantía de paz," enfatizando al mismo tiempo que "como institución responsable de velar por la seguridad del país, la Fuerza Armada de El Salvador es hoy más fuerte que nunca; tenemos la iniciativa y ya no habremos de perderla jamás."

En el ámbito regional, la escalada de presiones implementada por Estados Unidos sobre el gobierno sandinista recibió un nuevo impulso tras la declaratoria de un "embargo total" a Nicaragua, hecha pública por el presidente Reagan el 1 de mayo, durante su visita a Alemania con motivo de la realización de la cumbre económica mundial. Como justificación de la medida, Reagan adujo que "la política y acciones del gobierno de Nicaragua constituyen una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos y por lo tanto declaro una emergencia nacional para enfrentar esa amenaza." Al mismo tiempo, abrogó el tratado de amistad entre Estados Unidos y Nicaragua, vigente desde hacía 27 años. Contrariamente a lo que esperaba, la medida fue duramente criticada, no sólo por aquellos países relativamente independientes en su política exterior respecto de las directrices de la Casa Blanca, como el Grupo Contadora, sino incluso por varios aliados de la OTAN, entre ellos Gran Bretaña y Alemania; así como por Canadá, cuyo gobierno afirmó su voluntad de seguir comerciando con Nicaragua y proporcionándole asistencia para el desarrollo.

Sintomáticamente, entre las aisladas declaraciones de apoyo a la medida, destacó el comunicado emitido por la cancillería salvadoreña apenas 2 días después del anuncio de Reagan. En él, el gobierno de El Salvador adujo que las vinculaciones cada vez más estrechas de Nicaragua con el bloque soviético ponían en evidencia su "vocación intervencionista y totalitaria," particularmente respecto de los asuntos internos salvadoreños, en razón de lo cual no podía menos que apoyar la medida. Una semana después visi-

tó el país el vicescanciller nicaragüense, Dr. José León Talavera, quien rechazó ante su homólogo salvadoreño las imputaciones que atribuían al gobierno de Nicaragua el patrocinio de la crisis política de El Salvador y aseguró que Nicaragua "no representa ninguna amenaza a la existencia de países con sistemas de gobierno distintos del suyo." El vicescanciller salvadoreño comentó que la visita constituía "el inicio de un proceso más serio, más profundo, en la pacificación regional." Más allá de unas y otras declaraciones, sin embargo, la posición salvadoreña frente a los problemas del área siguió subordinada a la política regional de la administración Reagan, en medio de una coyuntura cada vez más azotada por los vientos de la guerra.

En el informe de labores rendido el 1 de junio ante la asamblea legislativa, el presidente Duarte expuso un balance global de su primer año de gobierno en torno a cinco "grandes objetivos" calificados de "instrumentos indispensables para alcanzar la paz, que es la primera aspiración de nuestro pueblo:" humanización, pacificación, democratización, participación y reactivación económica. A la base de la evaluación, Duarte reasumió una vez más el diagnóstico de que la crisis del país no obedece primariamente a contradicciones estructurales internas, sino que "nos ha sido impuesta con la ayuda y patrocinio de los gobiernos marxistas de Rusia, Cuba y Nicaragua;" y retomó la tónica y los tópicos de las declaraciones vertidas durante su reciente gira por Estados Unidos. Como parte de los esfuerzos para proteger los derechos humanos y humanizar el conflicto, destacó las medidas para perseguir las "actividades criminales de los escuadrones de la muerte" y propiciar un "cambio profundo y serio en el régimen de justicia;" así como la profesionalización de la Fuerza Armada mediante la elaboración de instructivos para normar los sistemas de operación del ejército y la creación del viceministerio de seguridad pública, el cual ha permitido desde junio de 1984 controlar la actividad de los cuerpos de seguridad y eliminar al "personal indeseable." A ello agregó que en el terreno militar la Fuerza Armada estaba enfrentando al FMLN con una "nueva concepción" donde la estrategia militar se articulaba con otras estrategias "en el campo político, ideológico, económico, social e internacional." En lo referente al proceso de diálogo, reafirmó su compromiso de continuar las conversaciones con el FDR-FMLN, pero advirtió una vez más que

no podía arriesgarse "en un diálogo que sirva de pretexto para continuar la guerra o para hacer propaganda." Al mismo tiempo, enfatizó la legitimidad dada a su gobierno por los últimos eventos electorales y resaltó que "hasta los terroristas en su última carta a la asamblea han tenido que reconocer la legitimidad" del órgano legislativo. Por otra parte, en alusión a la creciente movilización sindical de las últimas semanas, recordó que "la obediencia a la ley es indispensable para que exista armonía social" y previno que la instrumentalización de los sindicatos por el FMLN y las exigencias de incrementos salariales en las presentes circunstancias de una economía asediada por la guerra constituían una "falta de patriotismo" frente a la cual el gobierno actuaría "con prudencia pero con firmeza." Finalmente, en lo referente a la reactivación económica, aludió a los esfuerzos que el gobierno había desplegado "con la función básica de enfrentar los problemas que afectan a la mayoría de nuestro pueblo," estabilizar los precios y frenar el deterioro de las condiciones de vida, así como para implementar la austeridad del gasto público; manifestó que la reforma agraria seguía su proceso de consolidación; y resumió las recientes disposiciones crediticias destinadas a favorecer a caficultores, algodoneros, cañeros, cultivadores de granos básicos y ganaderos, y los beneficios fiscales concedidos al sector industrial.

En contraste con el reconocimiento brindado a estos presuntos logros por la prensa norteamericana, la evaluación de los partidos de oposición coincidió en señalar que "no existe capacidad en el gobierno de Duarte para hallar soluciones a la problemática nacional" y que la buena imagen internacional posiblemente contribuía a debilitar el apoyo externo al FMLN pero "no significa nada para la gran cantidad de gente desempleada ni trae una verdadera reactivación económica, y mucho menos contribuye a la pacificación." A despecho de las críticas, el mismo 1 de junio Duarte procedió a tomar la protesta de ley al nuevo gabinete, a cuyos integrantes advirtió que no "abusaran de sus puestos" y que "no se trata de hacer figuras sino de ponerse a trabajar." El recambio de los titulares ministeriales fue más bien moderado. Fueron confirmados los ministros de defensa y seguridad pública, planificación, economía, hacienda, agricultura y ganadería, educación y salud pública y asistencia social. Otros titulares simplemente fueron rotados: el Dr. Julio Alfredo Samayo pasó a la cartera de justicia; el Lic. Castillo Cla-

ramount al ministerio de relaciones exteriores; el Dr. Jorge Eduardo Tenorio al ministerio de la presidencia y el Lic. Rey Prendes al nuevo ministerio de cultura y comunicaciones, el cual absorbió las oficinas del instituto de turismo, televisión educativa, correos, secretaría de información, ANTEL e INDES y para cuyo funcionamiento la asamblea aprobó una erogación presupuestaria de 959.070 colones. Según voceros oficiales, el nuevo ministerio centralizará el manejo de todos los servicios de comunicaciones, en orden a "contrarrestar la desinformación" generada por las distintas fuerzas opositoras dedicadas a la desestabilización del proceso, nacional e internacionalmente.

A juzgar por las primeras declaraciones ministeriales, las líneas de fuerza de la gestión anticipable para los próximos 3 años arrancarán de la declaración de principios formulada por el presidente Duarte, alrededor de cuya figura se centrarán los nuevos proyectos gubernamentales. El vicepresidente y canciller, Castillo Claramount, lo explicitó al manifestar que los cambios en el servicio exterior "serán decisiones del presidente de la República, ya que nosotros somos secretarios del presidente, que tiene bajo su responsabilidad la política exterior."

No obstante las declaraciones de que la gestión estaría orientada en función de satisfacer primariamente las necesidades de las mayorías, el grueso de los proyectos de reactivación dados a conocer manifestó notorias prioridades al sector privado, sin lograr satisfacer, por lo demás, las exigencias y reclamos empresariales. En un intento de enfrentar la aguda situación financiera, el BCR y la junta monetaria dieron a conocer el 17 una serie de medidas cambiarias para evitar la devaluación del colón y estabilizar su valor de cambio con respecto al dólar. Las disposiciones incluían el traslado al mercado paralelo de 90 millones de dólares procedentes de la exportación del café y 17.5 millones de la de azúcar, así como del 100 por ciento de todos los servicios de transporte, viajes e inversiones internacionales, servicios gubernamentales, seguros, reaseguros y servicios directos que se exporten; y de todos los egresos e ingresos del sector privado (inversiones directas e indirectas, ingresos por concepto de repatriación de inversiones, ingresos y reembolsos por préstamos y entradas y salidas de otros pasivos y activos extranjeros). Según argumentó el presidente del BCR, ello no constituía una devaluación, porque "devaluar significa cambiar la

relación del tipo de cambio con respecto a una moneda extranjera para todos los bienes," mientras que las disposiciones tomadas apuntaban a "deslizar al mercado paralelo aquellos bienes menos necesarios para la canasta familiar y la actividad económica." Como debió haber previsto el gobierno, sin embargo, diversos sectores industriales y comerciales adversaron enérgicamente las disposiciones cambiarias. Entre ellos, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) calificó las medidas de "improvisadas y aisladas" y de conducentes a un acelerado proceso de devaluación; la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y la cámara de comercio advirtieron que "la forma radical en que han sido tomadas traerá la drástica elevación de los precios de venta de los productos importados y producidos en el país;" y la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS) se quejó de que el traslado de las llantas y los lubricantes al mercado paralelo aumentaría los costos de los transportistas en 120 por ciento, lo cual "va a terminar con la industria del transporte público."

En este clima de airadas protestas empresariales, el presidente Duarte expuso el 28 ante la Cámara Americana de Comercio las cuatro grandes políticas de su gestión económica: una política monetaria de integración, encaminada a proteger el tipo de cambio y las exportaciones, y a favorecer el incremento de la producción nacional y el consumo de los productos salvadoreños; una política cambiaria que busque mantener el poder adquisitivo de los salarios, defender las escasas divisas y propiciar el equilibrio en la balanza de pagos; una política crediticia para distribuir racionalmente los recursos financieros; y una política fiscal que disminuya efectivamente el creciente déficit. A su vez, dichas políticas estarían auxiliadas por una política de asistencia técnica y financiera a la empresa privada; una política del sector externo para promover las exportaciones e incentivar la inversión extranjera; y una política laboral conducente a armonizar las relaciones obrero-patronales.

En relación a este último punto, el mes de junio constituyó el escenario de prolongación y profundización de la lucha reivindicativa sindical generada y/o ampliada durante mayo, para enfrentar la cual el gobierno del presidente Duarte mostró cada vez menos disposición a la negociación política, y más proclividad a las medidas

de fuerza. El caso extremo del recurso a éstas lo ejemplificó el asalto militar a las instalaciones del hospital del seguro social, ejecutado en la madrugada del 2 por comandos combinados del ejército y la Policía Nacional, para desalojar a los trabajadores del ISSS en huelga desde el 6 de mayo. Durante la ocupación, los efectivos maniataron sobre el suelo al personal médico y paramédico, y procedieron a una exhaustiva búsqueda de armas en las salas de operaciones, de cuidados intensivos, de pacientes internados y de recién nacidos, colocados también sobre el suelo mientras duró el cateo de sus cunas. Asimismo, capturaron a 4 sindicalistas, entre ellos el secretario general del STISSS, Guillermo Rojas. Para justificar el asalto armado, el ministerio de cultura y comunicaciones, Rey Prendes, argumentó que "en el momento que un gobierno llegue a negociar bajo la presión de la toma de un solo edificio, abriremos las puertas para el desorden social en nuestra patria y cualquier grupo se tomará edificios para poder negociar. El gobierno ha cumplido con la constitución política al recuperar un edificio público que había sido tomado contraviniendo todas las leyes del país. Yo considero que El Salvador tiene que empezar a encaminarse por los senderos de la legalidad y la disciplina social."

Ni las declaraciones justificativas ni los despliegues de fuerza, empero, fueron suficientes para contener las protestas del movimiento de masas. Al día siguiente de las declaraciones de Rey Prendes, alrededor de 6 mil personas se manifestaron en la tercera marcha de solidaridad en protesta por la brutal ocupación del seguro social y demanda de solución a las distintas reivindicaciones laborales. Otras manifestaciones de solidaridad con el STISSS incluyeron paros de labores totales o parciales en diversas empresas e instituciones, entre ellas ANTEL, lotería nacional, Credisa, Banco Salvadoreño, Banco de Crédito Popular, rutas de buses 5 y 48, ministerio de educación, fábrica Delicia, Sacos Cuscatlán, etc. Junto a aquellas organizaciones que consuetudinariamente han mantenido una presencia de denuncia política a través de campos pagados y pronunciamientos públicos (AGEPYM, STIMMES, SITRALONB, SITRABIF, AGEMHA, MIPTES, Universidad de El Salvador, AEU, Comisión de derechos humanos no gubernamental, etc.), también protestaron enérgicamente organizaciones gremiales y de profesionales cuya participación política en los medios de comunicación ha solicitado ser bastante parca, como la Asociación Nacional de Enfermeras Salvadore-

ñas y el Colegio Médico de El Salvador. El asalto mereció incluso la vigorosa censura de organizaciones consideradas por el PDC como fracción importante en su base social de apoyo, como la Unidad Popular Democrática (UPD), la cual señaló que “ninguna excusa legalista podría borrar la ofensa, el daño y el irrespeto cometido contra un sector de nuestro pueblo y el pretender ampararse en que se trata de movimientos comunistas, además de que nadie lo cree ni es cierto, sólo va a provocar la unificación de todo el sector obrero contra un régimen que se vislumbra represivo y que en muy poco se diferencia de los anteriores.”

En contra de sus propósitos de mediatizar la lucha reivindicativa, las medidas de fuerza asumidas por el gobierno sólo contribuyeron a aglutinar las demandas laborales en torno a plataformas cuyo contenido político se hizo más explícito. Junto a la agudización del conflicto de ANDA, cuyos trabajadores salieron el 12 en manifestación hacia el ministerio de obras públicas y casa presidencial para insistir en la destitución de Perdomo, diversos movimientos laborales prosiguieron su gestación al interior de la administración pública. Entre ellos, destacaron la reanudación de la lucha del sindicato de trabajadores del INPEP para obtener la personería jurídica, repetidas veces negada por el ministerio de trabajo; las demandas del SITRABIF para que el BCR resolviera su pliego de peticiones; la lucha del sindicato de la Industria Pesquera de El Salvador (SIPES) en demanda de la reinstalación de 2 sindicalistas despedidos por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y un aumento en la cifra propuesta por ésta para la negociación del contrato colectivo; y, en el flanco agrario, la confrontación entre las cooperativas de los sectores tradicional y reformado agrupadas en FEDECOOPADES, FENACOA y la ANC y el Banco de Fomento Agropecuario (BFA), al cual acusaron de “negar créditos a los campesinos y dar incentivos a los cafetaleros,” lo cual mostraba que el gobierno de Duarte “no está interesado en resolver los problemas de los trabajadores, pero sí está altamente comprometido con las riquezas que los trabajadores producimos.”

En el terreno militar, las valoraciones optimistas emitidas por la Fuerza Armada y la administración Reagan sobre el curso de la guerra y el presunto descalabro estratégico evidenciado por el FMLN, sufrieron un severo contratiempo el

19, cuando, a pocos metros de las instalaciones del estado mayor, en pleno centro neurálgico de la Fuerza Armada, unidades del comando urbano “Mardoqueo Cruz,” del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRTC), miembro del FMLN, atacaron sorpresivamente a un grupo de *marines* norteamericanos quienes departían en el restaurante “Chili’s,” en la llamada zona rosa. Según las versiones de prensa, la acción habría sido ejecutada por entre 10 y 15 sujetos vestidos con camisas de camuflaje similares a las del ejército, quienes llegaron a bordo de 2 pick-ups livianos, se bajaron de ellos y empezaron a disparar inmediatamente sobre los *marines*. La embajada estadounidense aseguró que éstos no portaban armas, porque se encontraban con licencia, pero testigos oculares declararon que algunos clientes de los establecimientos adyacentes respondieron con armas cortas al fuego del comando, gestándose una balacera que se prolongó por espacio de un cuarto de hora, con saldo de 13 muertos, entre ellos 4 *marines*, 2 ingenieros civiles norteamericanos, 5 salvadoreños, 1 guatemalteco y 1 chileno.

En un comunicado emitido 2 días después del operativo, la jefatura político-militar del PRTC puso fin a las especulaciones de la prensa y de diversos sectores sociales y políticos del país en torno a la responsabilidad del ataque, y reivindicó la acción, denominándola “Yanqui agresor: en El Salvador otro Vietnam te espera.” Al mismo tiempo, aclaró que “el fuego de nuestros fusiles revolucionarios se concentró únicamente en los lugares donde se encontraban los asesores militares,” pero las unidades que brindaban seguridad al grupo de choque se vieron forzadas a responder al fuego de “elementos del ejército vestidos de civil” presentes en el lugar, cuya “poca capacidad técnica combativa” provocó que “muchas personas que se encontraban en los establecimientos adyacentes se vieran comprometidas en una balacera indiscriminada.” A su vez, la comandancia general del FMLN justificó el operativo como una “acción en legítima defensa de nuestro pueblo contra la criminal guerra no declarada” de la administración Reagan y el régimen democristiano, que “ha dejado miles de niños, mujeres y ancianos asesinados con la más cruel barbarie en El Mozote, Copapayo, El Junquillo, Las Hojas, Las Canteras, Río Sumpul, Calabazo, Culebrilla, Las Bermudas, Guadalupe y muchos otros caseríos y cantones;” y advirtió que “la presente acción es sólo el principio de la

guerra que haremos donde estén y como estén a cuanto yanqui agresor se encuentre en nuestro suelo."

Exacerbado por las amenazas y atentados dirigidos contra ciudadanos norteamericanos en diversas partes del globo, el presidente Reagan repuso inmediatamente que "los asesinos de El Salvador son diferentes de los que mantienen a 40 norteamericanos como rehenes en Beirut" y manifestó que "los límites de nuestra paciencia ya fueron sobrepasados," al tiempo que giró instrucciones al Pentágono y el departamento de Estado para suministrar "cualquier ayuda que sea necesaria para hallar y castigar a los terroristas que perpetraron este acto." A nivel interno, el gobierno salvadoreño achacó la responsabilidad directa del ataque a la dirigencia del FDR-FMLN; mientras que altos jefes militares, entre ellos el general Blandón y el coronel López Nuila, atribuyeron el hecho a la "desesperación" del FMLN ante la imposibilidad de ganar la guerra militarmente, interpretándolo como un intento de "llevar de nuevo las acciones a las áreas urbanas y reactivar las masas," y advirtieron que ello "nos podría llevar a tomar medidas como las de 1980." Por su parte, la derecha asumió el incidente como bandera política para criticar la condescendencia gubernamental hacia la "subversión." La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) señaló que el camino hacia la paz "está equivocado al dialogar con los asesinos de tantas matanzas;" la Cámara de Comercio e Industria manifestó que la acción se sumaba a "los ametrallamientos de trenes y buses, los ataques a poblaciones desarmadas, el dinamitar carreteras y caminos, y muchas otras formas de llevar la muerte a civiles desarmados;" y la ASI aprovechó el incidente para descargar la responsabilidad del mismo sobre el movimiento sindical, señalando que sus ejecutores eran "los mismos que organizan esta secuela de huelgas ilegales, tomas callejeras, manifestaciones, desórdenes y demandas" para incrementar el caos social.

Enfrentado a este clima de ofuscación e intolerancia, Mons. Rivera intentó aportar un poco de cordura. En su homilía dominical del 23, condenó categóricamente el ataque como "acto de terrorismo," pero se esforzó por ponderarlo en el contexto de "la tragedia que desangra el país" y manifestó que "sería hipócrita gritar ante el terrorismo de la extrema izquierda y guardar silencio ante el de la extrema derecha o el de la

Fuerza Armada," aludiendo a "hechos graves ocurridos durante el operativo que está en curso en el norte de Morazán." Agregó que la zona rosa era un escándalo por su despilfarro, en medio de la atroz miseria de la mayoría de salvadoreños, y censuró la despreocupación de algunos sectores minoritarios ante "otros hechos igualmente graves de que son víctimas muchos salvadoreños humildes." Tales declaraciones bastaron para llevar los ánimos de la derecha al borde del paroxismo, más de lo que lo hiciera el ataque mismo del PRTC. La Cruzada Pro-Paz y Trabajo respondió que "el pueblo está cansado de falsos profetas" que "les hacen el juego a los comunistas;" la Juventud Nacionalista de ARENA calificó de "luciferiana" la denuncia arzobispal; y el Frente Femenino Salvadoreño indicó que sus "escandalosas afirmaciones" atentaban contra la propia Iglesia católica.

Dentro de las fuerzas sociales y políticas afines al FDR-FMLN, la Universidad Nacional contextualizó el hecho en el marco del estado de guerra vivido por el país, denunciando el desproporcionado despliegue de publicidad montado en torno al suceso; mientras que al interior mismo del FDR, el Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC) y el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), manifestaron su distanciamiento crítico de la operación, sin repudiar por ello su alianza con el FMLN, y reiteraron la necesidad de continuar con el proceso de diálogo.

Este, empero, permaneció empantanado, sin que la carta enviada a la asamblea a finales de mayo hallara algún eco efectivo en el órgano legislativo. Como declarara Mons. Rosa Chávez después de reunirse con los Frentes a principios del mes, "el diálogo ha entrado en un momento muy delicado," cada vez más opacadas las voces a su favor por el estruendo de la guerra.

Consolidando los reacomodos tácticos exigidos por la guerra de desgaste anunciada por el comandante Joaquín Villalobos en abril, el FMLN realizó a lo largo del mes una serie de emboscadas contra unidades y convoyes del ejército, así como ataques de hostigamiento a varias de sus posiciones fijas en los departamentos de Cuscatlán, San Vicente, La Paz, Usulután, San Miguel y Morazán. El 6 decretó el séptimo para el transporte en lo que va del año, y durante 4 días mantuvo completamente paralizado el tráfico de vehículos hacia la zona oriental. En el occidente, fuerzas guerrilleras destruyeron la repetidora de microondas de ANTEL "El Faro," a pocos kiló-

metros de Santa Ana, al día siguiente de lo cual la ciudad fue declarada en estado de emergencia.

Por su parte, la Fuerza Armada prosiguió operativos en la zona de Jucuarán y las inmediaciones de la bahía de Jiquilisco, con el propósito de obstruir al FMLN sus rutas de abastecimiento logístico; al tiempo que efectuaba operaciones menores en Chalatenango, Cabañas, La Paz y San Vicente. En este último departamento inició el 12 una amplia operación de contrainsurgencia, acompañada de intensos bombardeos de artillería. Dos días después, dio inicio en el norte de Morazán al operativo más grande "en lo que va del año," según apreciación de voceros castrenses. El operativo, que abarcó no menos de 8 poblaciones e involucró a 7 mil efectivos, apoyados por tropas especiales de artillería y por más del 60 por ciento de la fuerza aérea, se inició con un desembarco de tropas en Rancho Quemado, cerca de Perquín. Las tropas fueron transportadas por 21 helicópteros y apoyadas por 11 aeronaves más que, según denuncias del FMLN, bombardearon durante 7 horas diferentes puntos de la zona de operación, mientras tropas de infantería avanzaban hacia el norte desde las orillas del río Torola, haciendo uso de un sofisticado equipo de barreminas para desmontar el minado en cadena tendido por el FMLN a lo largo de los caminos aledaños. Además de desarticular las posiciones guerrilleras en la zona, el operativo pretendía, según fuentes militares, localizar y liberar a los alcaldes secuestrados por la guerrilla. La primera fase de la operación concluyó el 23, cuando las tropas se bifurcaron hacia el norte de San Miguel y el sur de Morazán. La Fuerza Armada aseguró haber infligido unas 100 bajas al FMLN en el curso de esa primera fase y destruido una escuela de capacitación política y militar del ERP, donde fueron capturadas varias personas, al tiempo que habría hecho huir hacia territorio hondureños a unos 1.500 guerrilleros. El FMLN denunció que durante los 9 días que duró la operación, el ejército hizo uso masivo de bombardeos de artillería y aviación, y lanzó centenares de proyectiles de 105 mm. y bombas de 200 y 550 libras.

La Fuerza Armada desarrolló otras operaciones de envergadura en el norte de La Unión, sur y centro de Usulután, San Vicente, Chalatenango, Cuscatlán y en el cerro de Guazapa. En el área de Suchitoto y San José Guayabal "rescató" a 49 elementos de masas, mientras que en Chalatenango y San Vicente habría desmante-

lado 2 hospitales clandestinos y decomisado considerable cantidad de medicinas y equipo quirúrgico.

Según un balance del FMLN, durante junio habría ocasionado al ejército un total de 443 bajas, entre ellas 4 asesores norteamericanos, 2 oficiales, 4 pilotos, 2 subtenientes, 8 sargentos y 11 cabos. Además, habría derribado 2 helicópteros y averiado otros 4, y recuperado 23 fusiles y 2 ametralladoras. En lo relativo al sabotaje, habría destruido 34 torres primarias y 246 postes del tendido eléctrico, causando daños por más de medio millón de dólares.

Por su lado, al presentar el balance del plan militar de 1985, el general Blandón expuso que los objetivos del mismo habían sido cumplidos exitosamente con ofensivas del ejército en casi 22 zonas conflictivas del territorio nacional, a consecuencia de lo cual la guerrilla había caído "en un debilitamiento de recursos humanos y materiales, al grado de que actualmente se estima un activo de 6 a 6,500 alzados en armas, a diferencia de los 12,000 que tuvieron entre 1983 y 1984." Informó que, según cuadros estadísticos, durante el primer semestre del presente año la Fuerza Armada había efectuado 84 operaciones mayores de más de 8 y hasta 27 días; 14 operaciones medianas; 16 menores; 12 reconocimientos aéreos armados; 7 operaciones móviles con factor sorpresa, que dieron como resultado la captura de importantes comandantes guerrilleros; 27.623 patrullajes con incorporación de cuerpos de seguridad; y 4.897 emboscadas. Durante el mismo período, las bajas castrenses fueron 211 muertos, 267 heridos y 22 desaparecidos. El FMLN habría sufrido 3,225 bajas: 1.500 capturados; 774 muertos; 455 heridos y 456 desertores. Según Blandón, "ningún elemento de la Fuerza Armada se entregó y lucharon hasta el último cartucho antes que rendirse."

A nivel internacional, la manipulación que la Casa Blanca hiciera del viaje de Daniel Ortega a Moscú, logró arrancar del senado y la cámara de representantes la sanción legislativa cabildeada afanosamente por el presidente Reagan para reanudar la asistencia económica a los contrarrevolucionarios nicaragüenses. Regionalmente, los propósitos de Reagan se vieron favorecidos por la emboscada de que fuera objeto el último día de mayo una patrulla de la guardia civil costarricense que realizaba labores de vigilancia en Las Crucitas de Tiricias, a 800 metros de la frontera nicaragüense. El gobierno de Costa Rica respon-

sabilizó inmediatamente del ataque al ejército sandinista, ante el enérgico desmentido de las autoridades de Managua y su sugerencia de realizar en el marco de Contadora una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. El presidente Monge solicitó una reunión de emergencia del consejo permanente de la OEA, amenazó con adoptar "las más drásticas medidas," incluida la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para frenar las "continuadas agresiones" del régimen nicaragüense; mientras que la administración Reagan aprovechó el incidente para justificar su programa de militarización de los cuerpos de seguridad de Costa Rica y agilizar la entrega del armamento donado en el marco del convenio de asistencia militar suscrito hace 4 años.

Estrechando aún más el cerco de presiones sobre Nicaragua, el 19 se suspendió en Panamá la programada reunión de Contadora, sin que los asistentes llegaran siquiera a discutir alguno de los temas incluidos en la agenda previa, ante el rechazo del grupo de Tegucigalpa de la petición nicaragüense de incluir en ella la discusión de la

ayuda financiera otorgada por Estados Unidos a los contras. Apenas una semana después del fracaso de la reunión, la cámara de representantes aprobó por 312 votos a favor y 111 en contra una resolución que faculta al presidente norteamericano a autorizar una invasión a Nicaragua sin necesidad de una declaración formal de guerra por parte del congreso, en los casos de "el arribo a Nicaragua de armas nucleares o aviones soviéticos MIG; secuestro y actos de terrorismo que afecten a estadounidenses o aliados de Estados Unidos; para impedir que Nicaragua sea utilizado como un refugio; para proteger contra un peligro claro y real de acción hostil contra Estados Unidos o un aliado; para proteger o evacuar ciudadanos estadounidenses, o para proteger la embajada de Estados Unidos" en Managua. Al parecer, decidido a castigar las vinculaciones de Nicaragua a la "internacional del terror," el presidente Reagan no consideró medios más efectivos para ello que seguir obstaculizando todas las posibles salidas diplomáticas a la crisis regional, en favor de la intervención y la guerra.

